



H. Senadora Luz Ebensperger O.

**BOLETÍN N° 12.468-18**

Denominación:	Facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte.
Origen:	Moción (Letelier)
Trámite:	1° Constitucional H. Senado/ discusión particular
Urgencia:	Sin urgencia
Otros comentarios:	La Senadora Ebensperger fue autora de la indicación N° 3 que cambió la fisonomía del proyecto.

**CONSIDERACIONES DEL PROYECTO:**

El proyecto de ley originalmente modificaba el patrimonio reservado de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal consagrado en el artículo 150 del Código Civil para considerar separada de bienes a la mujer respecto a la enajenación de bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte.

Producto de las dudas planteadas en la Sala durante la discusión en general y las ideas surgidas de las indicaciones la comisión finalmente optó por la modificación del enunciado del artículo 166 del mismo Código, popularmente conocido como el artículo del suegro, eliminado la condicionalidad de la asignación de la redacción actual y la referencia a la aceptación de esta. En lo demás, se conservó las reglas del artículo especialmente la regla 3ª que afirmando que durante la vigencia de la



H. Senadora Luz Ebensperger O.

sociedad conyugal los frutos de las cosas administradas por la mujer como si en la practica fuera separada de bienes le pertenecen, pero disuelto el régimen deberá estarse a la renuncia o no de los gananciales. Bajo esta disposición subyace la idea de protección a la mujer casada.

La supresión del inciso final del artículo 1225 reafirma la regla general en orden a que la mujer, en cuanto asignatario, puede aceptar o repudiar libremente las cosas que se le han heredado.

La modificación al artículo 1322 y 1326, del que se eliminan sus incisos segundo, persiguen que la mujer casada bajo este regimen patrimonial pueda provocar la partición, ejerciendo por ejemplo la acción de partición, y pueda asimismo concurrir al nombramiento del juez partidor.

Finalmete y para efectos de concordancia, se suprime en el inciso tercero del artículo 1749 del Código Civil.

Así las cosas, el proyecto cumple en general con la idea de dotar de plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal para administrar los bienes que le hayan sido donados, heredados o legados y que en lo sucesivo y de prosperar esta iniciativa, administrará con independencia de su marido en los términos del nuevo artículo 166 propuesto. No obstante, podría plantearse cierta situación de desventaja respecto a los frutos de los bienes donados o heredados del marido que si entran al haber de la sociedad conyugal, situación que se subsana en parte manteniendo la regla 3era de ese artículo.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

### **BOLETÍN N° 12.512-11**

Denominación:	Promueve el acceso al agua potable
Origen:	Moción (Girardi, Goic, Chahuán y Quinteros)
Trámite:	1° Constitucional H. Senado/ discusión en general
Urgencia:	Acuerdo de Sala
Otros comentarios:	Votación 5x0x0 en comisión de salud

### **CONSIDERACIONES:**

El proyecto de ley modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para establecer la obligación de las empresas sanitarias concesionarias de distribución de agua potable de instalar bebederos gratuitos de agua en todas las plazas y paseos dentro del área de su concesión.

Similar tiene objeto tiene la modificación del Código Sanitario esta vez respecto a las farmacias que deberán poner a disposición de sus clientes, gratuitamente y sin previo requerimiento, agua potable en cantidad suficiente.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

En el mismo orden de ideas, los establecimientos educacionales de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior deberán asegurar el acceso al agua potable destinada al consumo humano, por la instalación de bebederos en los patios donde se recreen los menores y donde se desarrollen actividades físicas.

En cuanto a la modificación del Código del Trabajo, en lo que resguarda las reformas o medias mínimas de higiene y seguridad de las faenas fijadas por los Servicios de Salud respectivos, se agrega la obligación del empleador de dotar cada lugar de trabajo de agua potable destinada al consumo humano y saneamiento, de uso individual o colectivo. En cuanto a los lugares transitorios, se fija una cantidad mínima de 100 litros de agua per cápita.

Esa obligación ya existía en los artículos 12 y 14 del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud del año 2000, que Aprueba el Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, en orden a que todo lugar de trabajo debe contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo, y, que aquellas faenas o campamentos de carácter transitorio donde no existe servicio de agua potable, la empresa deberá mantener un suministro de agua potable mínimo de 100 litros de agua por persona y por día.

Finalmente, Los bebederos públicos deben ser diseñados, contruidos y mantenidos de forma de evitar pérdidas y cumplir condiciones de higiene allí mencionadas.

## **SISTEMA DE PENSIONES ACTUAL**

El régimen actual es aplicable a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Los fondos son de propiedad del afiliado.

**PILAR VOLUNTARIO**  
(ahorro voluntario APV)  
Con incentivos ei tributarios

**AHORRO PREVISIONAL**  
10 % de la renta (remuneración) del  
trabajador art. 17 D.L. 3500

**PILAR SOLIDARIO**  
(LEY 20.255 Reforma Previsional Bachelet 1)  
recientemente modificada por la Ley Nº 21.190 (dic de  
2019) y que aumentó considerablemente sus beneficios

Contempla la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte  
Previsional Solidario (APS) hasta alcanzar el máximo de la  
Pensión máxima con aporte solidario.

### Administración del Sistema.

Ahorro individual: Administradora de Fondos de  
Pensiones; Compañías de Seguros

Pilar Solidario: Instituto de Previsión Social (IPS)

Pilar Voluntario: AFP's, Compañías de Seguro,  
Administradoras de Fondos Mutuos, Bancos, entre otros

## **SISTEMA DESPUÉS DE LA REFORMA ANUNCIADA**

**PILAR  
VOLUNTARIO**

**PILAR COLECTIVO**  
(cotización del 3% a cargo  
del empleador)

**AHORRO INDIVIDUAL (13%)**

**PILAR SOLIDARIO**

### Administración del Sistema.

El nuevo “pilar de ahorro colectivo” será administrado por  
un ente público destinado al efecto. (acuerdo con la DC en  
la Cámara)

Aumenta un 3% la cotización del trabajador administrada  
por la AFP.

Se fortalece la competencia, se reducen los costos, la  
participación y protección de los afiliados (ej. Nueva  
intendencia de Protección de los afiliados) y del Consejo  
Consultivo Previsional.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

**Boletín N° 11.850-04**

Denominación:	Modifica la Ley General de Educación, con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas.
Origen:	Moción (Quintana, señoras Órdenes, Provoste y Rincón y señor Latorre)
Trámite:	1° Constitucional H. Senado/ En particular y en general a la vez
Urgencia:	Acuerdo de Sala
Otros comentarios:	-Materias de L.O.C. (discusión sobre el quórum de aprobación).

**CONSIDERACIONES DEL PROYECTO:**

- I. El proyecto de artículo único (y una disposición transitoria) modifica el artículo 9° texto refundido de la Ley General de Educación para establecer la obligación de la comunidad educativa, -conformada según ese mismo precepto por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales-, de velar por la participación de mujeres y hombres e igualdad de derechos y la provisión de una educación no sexista.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Estableciéndose a continuación en su texto una segunda obligación específica para los establecimientos educacionales monogénéricos, que deberán realizar, dentro de un plazo de 2 años contado de la publicación de la ley, un proceso informado, participativo y **vinculante**, a fin de que el Consejo Escolar (o una entidad similar) decida si mantiene su condición o se transforman en establecimientos mixtos.

- II. Es dable del caso recordar que el artículo 19 N°s 10 y 11 de la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, de manera que esas garantías resultan dos caras de una misma moneda.
- III. En lo que respecta al primero de esos derechos, se reconoce además en el texto fundamental que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Afirmando imperativamente que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de ese derecho.
- IV. Por lo mismo, al tenor expreso de la Carta Fundamental, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. A la vez que reconoce a los padres el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.
- V. Finalmente, el inciso final de ese mismo número encarga a una Ley Orgánica Constitucional los requisitos mínimos que deberán



H. Senadora Luz Ebensperger O.

exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

- VI. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoce el derecho de toda persona (obligando a los estados parte) la libertad de los padres -y tutores legales- de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- VII. De ahí que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, organismos a cargo de la supervisión del Pacto, en sus Recomendaciones Generales, haga hincapié en la autonomía de los establecimientos educacionales, que comprende la capacidad de adoptar las decisiones que sean eficaces a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas. Afirmanto también que el autogobierno debe ser compatible con los sistemas de fiscalización pública.
- VIII. Los establecimientos educacionales son cuerpos intermedios a los que imponer establecer exigencias imprecisas, numerosas, vagas o discrecionales es contrario al pluralismo de proyectos educacionales, a la autonomía de esos cuerpos intermedios, al





H. Senadora Luz Ebensperger O.

derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional para la educación de sus hijos y el derecho a abrir, mantener y organizar los establecimientos educacionales. Recuérdese que conforme al numeral 26 del artículo 19 de la C.P.R no se puede afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, como ocurriría precisamente en la especie.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

**Boletín N° 12.047-14**

Denominación:	Modifica la ley N° 19.418, con el objeto de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes
Origen:	Moción (Aravena, Ebensperger, Lagos, Montes y Rincón)
Trámite:	1° Constitucional H. Senado/ discusión en general
Urgencia:	Sin urgencia
Otros comentarios:	-Materias de L.O.C. -ver informe de la Excm. Corte Suprema. -segunda discusión art. 128 del Reglamento del Senado.

**CONSIDERACIONES DEL PROYECTO:**

El proyecto de ley mediante la modificación del Decreto Supremo N° 58, del Ministerio del Interior, del año 1997, que Fija el Texto Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.418, Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias:

1. Reemplaza las definiciones de unidades vecinales y de junta de vecinos. En todo caso, las definiciones que intenta carecen de rigor



H. Senadora Luz Ebensperger O.

técnico al hablar por ejemplo de “la jurisdicción las juntas de vecinos para el desarrollo de sus funciones” o su “adecuada autonomía” sin que baste parafrasear una disposición constitucional puesto que podría significar con esa “adecuada” una limitación o control por ejemplo del poder estatal.

2. Se agrega un nuevo artículo 9° bis del todo incensario toda vez que la Ley N° 21.146 que Modifica Diversos Cuerpos Legales con el Objeto de Simplificar el Procedimiento de Calificación de las Elecciones de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, esa obligación de certificación por parte del secretario municipal (ver el artículo 6° bis de la ley vigente). En todo caso, dotar de esta nueva atribución es una materia de iniciativa exclusiva. Además, merece reparo la concesión directa de la acción de ilegalidad municipal del artículo 151 de la LOC de Municipalidades.
3. Con la modificación al artículo 12 de la ley, se reconoce a cualquier asociado a tener acceso a los documentos de la organización, así como también a todos los contratos y convenios suscritos con la municipalidad y con otras entidades públicas o privadas, respecto a lo cual correspondería realizar los reparos tendientes a resguardar la protección de datos personales de terceros.
4. El nuevo artículo 14 bis reconoce a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, entre otros, el derecho a:
  - 4.1. conocer con antelación a su aprobación, los proyectos municipales, de servicios públicos y los proyectos de inversión privados que se ejecutaren en la unidad vecinal,**



H. Senadora Luz Ebensperger O.

**y a plantear su opinión o las observaciones que estimen pertinentes a la municipalidad o al respectivo servicio público antes del comienzo de la ejecución de los respectivos proyectos,** lo que en definitiva pudiera significar una mayor burocracia en la ejecución de proyectos o la injerencia en asuntos fuera del ámbito de su competencia de estas organizaciones.

Para esos efectos, y de conformidad a lo dispuesto en el nuevo artículo 14 ter, el Alcalde, el Concejo y en general la autoridad de que se trate, deberá comunicar la existencia del proyecto a las organizaciones respectivas y dar respuesta fundadas a sus inquietudes en un plazo de 30 días.

- 4.2. Asistencia legal judicial y extrajudicial, gozando de beneficio de asistencia jurídica gratuita.
- 4.3. A la facilitación de apoyos y asesorías técnicas por parte del Estado así como el de participar en la elaboración, ejecución, control y evaluación de programas, planes y presupuestos municipales; (materia de iniciativa exclusiva y de competencia municipal).
- 4.4. A reserve una asignación de apoyo organizacional, formada por un porcentaje de los proyectos financiados con fondos públicos que les sean aprobados a las organizaciones. (iniciativa exclusiva del Ejecutivo).
- 4.5. Derecho a un procedimiento único para las gestiones y trámites que los dirigentes vecinales realizan en las municipalidades en favor de los socios de sus organizaciones; estableciéndose también la creación de una credencial de identificación de los dirigentes que facilite su acceso y gestiones ante la



H. Senadora Luz Ebensperger O.

administración pública y ante otras instituciones y servicios gestionados por entidades públicas y privadas, lo que se traduce en una discriminación arbitraria en favor de quienes detentan la calidad de dirigente vecinal.

5. Se establece una nueva inhabilidad de los dirigentes vecinales que cesarán en sus cargos por el hecho de ser contratados o recibir una remuneración de la municipalidad respectiva. Se concede expresamente contra la autoridad el recurso de ilegalidad (inciso cuarto nuevo del artículo 23).
6. Se establecen normas de administración de sedes y recintos comunitarios sean propios o cedidos por algún “título de legítima tenencia” y se obliga al Ministerio de Bienes Nacionales -aún cuando se utiliza la palabra propender- , a identificar inmuebles del catastro fiscal que las juntas de vecinos puedan adquirir en propiedad u obtener en concesión gratuita o comodato para servir de sede o local de funcionamiento de estas organizaciones.
7. Cuando se hayan constituido legalmente dos o más juntas de vecinos en el territorio de una misma unidad vecinal, estas **deberán** constituir entre sí una junta territorial para efectos de actuar mancomunadamente y representar al conjunto de habitantes de la respectiva unidad vecinal ante el alcalde y las demás autoridades municipales y de otros servicios e instituciones públicas (art. 37), vulnerándose con ello el derecho a la libre asociación.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

8. De conformidad al número 8 nuevo propuesto al artículo 42, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias podrán Representar a los vecinos ante los tribunales de justicia o ante las agencias estatales o arbitrales competentes, interponiendo acciones, reclamos o denuncias de interés público, difuso o colectivo en que pudieren verse afectados los derechos de todo o parte de la comunidad territorial. Para esos efectos, las juntas de vecinos podrán interponer en nombre propio y sin necesidad de mandato especial de persona alguna, todas las acciones que franquea la legislación común y, especialmente, la acción de ilegalidad municipal ante la corte de apelaciones respectiva, consagrada en el artículo 151 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Como se ve la redacción peca de poco precisa y ciertamente otorga una facultad excesiva a estas organizaciones.
9. Dentro de las denominadas atribuciones económicas y de servicios, estas asociaciones podrán procurar la buena calidad de los servicios a la comunidad, tanto públicos como privados ser oídas por la autoridad municipal en la definición de los días, características y lugares en que se establecerán las ferias libres, ferias de Navidad y otras de carácter temporal y otros comercios callejeros y participar en la administración y control de sus permisos; Emitir su opinión en el proceso de otorgamiento y caducidad de patentes de bebidas alcohólicas y colaborar en la fiscalización del adecuado funcionamiento de los establecimientos en que se expendan; y, **promover la cobertura, calidad y funcionamiento de los servicios básicos domiciliarios como agua potable y servicios sanitarios,**



H. Senadora Luz Ebensperger O.

**gas, electricidad y telecomunicaciones. (¿podrían por ejemplo desarrollar actividades económicas en estos sectores?).**

10. Asimismo, las juntas de vecinos podrán agruparse con otras juntas de vecinos y con organizaciones funcionales y otras organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro de cualquier naturaleza, que tengan presencia efectiva en la respectiva comuna o sector territorial de esta, con el objeto de abordar problemas y asuntos de interés común y sostener interlocución con las autoridades y con otras entidades públicas o privadas. Éstas serán instancias de agrupación desformalizadas y flexibles que podrán denominarse consejos, redes, coordinadoras, mesas territoriales u otras, no gozarán de personalidad jurídica, sin perjuicio de la facultad que se les reconoce de darse a sí mismas una estructura organizativa o vocería básica e identificable ante terceros.
11. Las juntas de vecinos, las uniones comunales de juntas de vecinos, las juntas territoriales y las agrupaciones de juntas de vecinos podrán organizar y convocar cabildos vecinales, territoriales o comunales.
12. Se crea la Escuela Nacional de Dirigentes Sociales, que contará con apoyo técnico y logístico del Ministerio Secretaría General de Gobierno. (materias propias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que podrían significar la instrumentalización de las asociaciones).



H. Senadora Luz Ebensperger O.

- I. Como se ve, muchas de las materias que trata el proyecto corresponde a asuntos de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ora porque implican mayor gasto fiscal o fijan nuevas atribuciones a los órganos públicos (art. 65 CPR). Se aconseja que el proyecto sea visto por la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización dada la gran cantidad de modificaciones y atribuciones municipales involucradas propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (art. 118 CPR).
- II. La redacción actual del proyecto afecta la autonomía de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para desarrollar sus propios fines específicos al atribuírsele competencias que rebasan por mucho ámbito propio. Además, en la práctica, significaría la obligatoriedad para los vecinos de integrarse a una de ellas para ser oído o la obligación de dos o más juntas de una misma unidad vecinal a agruparse. (19 N°15 CPR). Se sugiere realizar reserva de constitucional de este punto.
- III. Adolece asimismo de falta de precisión en uso de términos jurídicos o ambigüedad que poco ayudan a su inteligencia.
- IV. Resulta loable la finalidad del proyecto en orden a dotar de mayor transparencia y mejor gestión de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, pero debe evitarse afectar las competencias de los consejos de la sociedad civil (COSOC), las municipalidades y la lógica.





H. Senadora Luz Ebensperger O.

### **BOLETÍN 12.215-05**

Denominación:	Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando.
Origen:	Moción (Cámara de Diputados)
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ En general/ Comisión de Hacienda
Urgencia:	Acuerdo de Comités
Otros comentarios:	Ver Boletín N°12048-07 (moción senadora Ebensperger).

### **CONSIDERACIONES.**

I). El artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas castiga:

a). Como autor de contrando a quién introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas.

b). Como autor de contrabando impropio a quién, al introducir al territorio de la República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

c). A quién extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas al Servicio Nacional de Aduanas.

d). Quién introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial, como lo es por ejemplo una zona franca, a otros de mayores gravámenes o al resto del país, como sería el caso de la Zona Franca de Iquique reglado en el D.F.L. N° 341 de 1997 del Ministerio de Hacienda.

II). En cuanto a la determinación de la pena aplicable al delito, el artículo 178 de ese cuerpo legal remite al valor de las mercaderías objeto del delito. Con es objeto:

a). Sanciona con una multa de una a cinco veces el valor de la mercancía o con presidio menor en sus grados mínimo a medio, si las mercaderías tienen un valor inferior a 25 UTM. [presidio menor en sus grados mínimo a medio = 71 días a tres años].

b). Con una multa de una a cinco veces el valor de la mercancía o con presidio menor en sus grados mínimo a medio ese valor excede de 25 UTM.

c). En el caso de mercancías afectas a una tributación especial o adicional, con una multa del cincuenta al trescientos por ciento de los impuestos, derechos y gravámenes eludidos, lo que significa ciertamente un aumento del valor para realizar el cálculo de la pena.

d). Finalmente, la reincidencia se sanciona con el aumento en un grado en la pena y la incautación de vehículos utilizados en la actividad de contrabando.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

III). El proyecto de ley:

- a). Incorpora un nuevo numeral 1 al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, a fin de castigar con una multa de una a cinco veces el valor de la mercadería objeto del ilícito, siempre que el valor de la mercadería no exceda de 10 UTM. Crea en definitiva una primera categoría de este ilícito.
- b). Tratándose de reincidencia en el contrabando de tabaco, sus derivados y en general productos que afecten la salud, se sanciona además con presidio menor en su grado mínimo. (idea del proyecto presentado por la Senadora Ebensperger).
- c). Con una pena de 5 veces el valor Y presidio menor en su grado medio, si el valor de mercancía excede de 10 UTM pero no sobrepasa las 25 UTM. No se aplican en consecuencia como alternativa hasta ahora.
- d). Con una pena de 5 veces el valor Y presidio menor en su grado máximo si excede las 25 UTM. No se aplican en consecuencia como alternativa hasta ahora.
- e). Debe tenerse presente especial que conforme a la modificación al artículo 172 de la Ordenanza, efectuada por el proyecto, el valor de la mercadería sujeta a tributación especial no sólo incluye el valor aduanero (como en la actualidad) sino que suman en lo sucesivo también los derechos, tasas y gravámenes que corresponde pagar conforme al regimen general de importación.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

### BOLETÍN N° 13.090-25

Denominación:	Modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica.
Origen:	Mensaje
Trámite:	2° Constitucional H. Senado/ discusión particular
Urgencia:	Discusión inmediata
Otros comentarios:	El proyecto despacho por la Cámara de Diputados era mucho más amplio, pero el acuerdo político en el Senado permitió llegar al texto actual.

### CONSIDERACIONES DEL PROYECTO:

1. Incorpora un nuevo artículo 268 septies al Código Penal que sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo [71 a 540 días], a:
  - 1.1. Quién, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, **mediante violencia o intimidación en las personas.**



H. Senadora Luz Ebensperger O.

- 1.2. Quién, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación por la instalación de obstáculos levantados en la vía pública, con objetos diversos.
- 1.3. Quién sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.
2. Se sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio [71 a 540 días/ 541 a 3 años], a:
  - 2.1. El que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales.
3. Debe considerarse que, por regla general aplicable a los concursos, si los hechos descritos anteriormente correspondieren un delito más grave en cuanto a su pena, se le aplicará la pena señalada en éste.
4. Se modifica el texto vigente del artículo 269, con el propósito de constituirlo en el tipo penal residual de las conductas descritas.
5. El nuevo artículo 449 ter del Código Penal establece una agravante muy calificada que aumenta en un grado la pena contemplada para los delitos contemplados en los Párrafos 3 y 4 del Título Noveno, de los Crímenes y Simples Delitos contra la Propiedad, del Código Penal, Robo con Fuerza en las cosas y hurto, que se perpetren con ocasión de una



H. Senadora Luz Ebensperger O.

calamidad pública o alteración del orden público, actuando en grupo o amparado por éste.

6. El nuevo artículo 449 quáter excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado, aún cuando el responsable no sea reincidente, sustrayendo o destruyendo todo o la mayor parte del inventario de un establecimiento de comercio o industrial.
7. El proyecto también contempla normas de determinación de la pena en orden a:
  - 7.1. En los casos del artículo 436 del Código Penal, esto es, los robos ejecutados con violencia o intimidación en las personas, cometidas con ocasión de una calamidad pública o alteración del orden público, actuando en grupo o amparado por éste, excluye la aplicación de su grado mínimo y determina la imposición de la pena privativa de libertad.
  - 7.2. En el caso del artículo 449 quáter, si respecto al autor concurren las circunstancias agravantes de haber sido condenado el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale igual o mayor pena, o, haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie. (Art. 12 N°s 15 y 16 del Código Penal).
  - 7.3. Con la modificación del artículo 450, sancionan como consumados los nuevos artículos 449 ter y quáter desde que se encuentran en grado de tentativa.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

### **INTERVENCIÓN SUGERIDA:**

Presidente:

Cómo suele ocurrir en todo tipo de materias -y ciertamente una materia tan importante como el orden público no es la excepción-, la ley llega tarde a la realidad.

Con este proyecto se busca volver eficaz la persecución penal puesto que los antiguos tipos de desordenes o atentado contra los derechos garantidos por la constitución resultaron insuficiente frente al saqueo de locales comerciales y supermercados, quioscos, o, conductas que para algunos pudieron parecer hasta graciosas como “el que baila pasa”, pero que encerraban una realidad violenta en su fondo.

Han tenido que ocurrir situaciones de saqueos, robos, hurtos y otros hechos de violencia para que nos avoquemos a la revisión de títulos y artículos que se contaban entre los originales del Código Penal de 1874.

El derecho, ya sea a nivel del ordenamiento constitucional, legal o los tratados internacionales, resguarda con particular esmero el derecho a la libre circulación. La denominada libertad ambulatoria es una basa de las democracias liberales porque permite el ejercicio pacifico de otras libertades.

Como sociedad debemos castigar de la manera que lo propone el proyecto a quién impida totalmente la circulación por nuestros caminos y carreteras, y ciertamente, a quién ese contexto se valga de armas u objetos



H. Senadora Luz Ebensperger O.

contundentes para obstaculizar el movimiento de quién ya se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad.

En este orden de ideas, el ordenamiento penal siempre ha manifestado particular repulsa a quién delinque en grupo aprovechándose de un desastre de la naturaleza, una emergencia o de una aglomeración de personas.

Y lo hace porque, aprovechándose de la circunstancia, busca procurarse la impunidad amparándose en el tumulto, en el grupo, en la gente. En ese sentido es que este proyecto castiga el saqueo, aquel delito contra la propiedad cometido de una manera oportunista a propósito de una manifestación.

Concuerdo también en las reglas de determinación de la pena y de concursos penales del texto que se nos proponen. Indudablemente el injusto penal es más grande, tiene mayor entidad, cuando se comete con ocasión de una alternación al orden público y cuando el autor ha tenido nuevamente la oportunidad de ajustarse o conformar su actitud al derecho y no lo ha hecho, por lo que merece ciertamente un reproche mayor.

En el convencimiento que el ejercicio legítimo de los derechos, incluidos ciertamente el de reunión, la libertad de circulación o de opinión, tiene como límite inherente el abuso de estos y la afectación de terceros, habiendo revisado también la parte correspondiente de los tratados internacionales en la materia es que votaré a favor del proyecto de ley.





**REFORMA CONSTITUCIONAL  
SOBRE DOMINIO Y USO DE LAS AGUAS.**

**Resumen.**

Nº de Boletines:	6.124-09; 6.141-09; 6.254-09; 6.697-07; 7.108-07; 8.355-07; 9.321-12; 10.496-07 y 10.497-07 (refundidos).
Proyecto de ley:	Sobre dominio y uso de las aguas.
Origen:	Diversas mociones parlamentarias.
Urgencia:	Acuerdos de comités.
Comisión:	Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía (2016).
Tramitación:	El proyecto se encontraba en 1º trámite constitucional. (en general) / y se había pedido segunda discusión
Otras consideraciones:	El proyecto modificaba el Título III de la Constitución Política de la República “De los derechos y de los deberes constitucionales”, por lo que requiere conforme al inciso segundo del



	artículo 127 de la Carta Fundamental la aprobación de dos terceras partes de los senadores en ejercicio.
--	--

#### CONSIDERACIONES.

- i. ¿Por qué rechazar una reforma constitucional que declaraba bien nacional de uso público el agua? Porque: 1. Era innecesaria. 2. Estaba mal redactada y era “tramposa” en otras leyes y proyectos de ley. 4.



Afectaba derechos ya existentes de las personas y, 5. Era contrario a nuestros principios.

- ii. El proyecto declaraba a las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público y declaraba de **utilidad pública** los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido. Esos derechos de propiedad de los particulares el proyecto los declaraba siempre temporales (la autoridad administrativa decidiría en definitiva cuanto tiempo), se circunscribirán a fines específicos (habría que indicar para que se usa el agua y que ese uso fuera “autorizado” por la autoridad según su criterio) y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas (hoy los derechos ya están sujetos al pago de la patente, lo que hay que hacer es cobrarlas efectivamente y subir el precio de la patente por no uso para evitar la especulación).
- iii. Ese proyecto priorizaba el agua para el consumo humano, el consumo doméstico y el saneamiento (alcantarillado), resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico. El Código de Aguas vigente ya prioriza el consumo humano y doméstico y la ley general de servicios sanitarios hace lo mismo con el agua para saneamiento. Las aguas indígenas a su vez tienen un régimen propio en la ley que creó CONADI. En la comisión de agricultura se discute una modificación importante al Código de Aguas que refuerzan los principios antedichos y crea derechos de aprovechamiento para la conservación -esto es, para preservar los cauces-.
- iv. Así como estaba redactado el proyecto no sólo afectaba a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) y el mar adyacente que son actualmente bienes nacionales de uso público, sino que incluía además por ejemplo los glaciares o el agua de mar desalada. En el congreso, dada la importancia de la protección de los glaciares y la importancia del agua desalada para actividades como la minería en el norte o recientemente en la agricultura, se están estudiando los regímenes que lo regulan de manera detalladas en varios proyectos de ley. De haberse aprobado la reforma habría sido una manera “tramposa” de saltarse la discusión de temas importantes.



- v. El Código Civil define a los bienes nacionales como aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Agregando a continuación que si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Señala en su inciso final que los bienes nacionales cuyo uso NO pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.
- vi. **El artículo 595 del mismo Código dispone a su vez que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, por eso se hacia innecesaria la reforma constitucional.**
- vii. Los bienes nacionales de uso público pueden ser objeto de concesiones o permisos para que los particulares lo usen bajos ciertos y determinados respectos. El fundamento de esas instituciones incide en que siendo los bienes nacionales de uso público por su naturaleza susceptibles de ser usados por los particulares pueden transformarse en uso y goce particulares.
- viii. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. (inciso final del artículo 19 N° 24 Constitución Política de la República).
- ix. Todas las personas tienen la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Ese es el camino, la ruta jurídica necesaria para que la persona se convierta en propietario, termina con la reserva estatal de bienes apropiables y asegura el derecho a la propiedad privada (en este caso el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas).



- x. En consecuencia, todos los bienes existentes por regla general son susceptibles de apropiación privada, y ni el legislador o el Estado en general podrán obstaculizar la libertad para adquirir el dominio mediante estorbos o trabas que embaracen la libre ruta hacia la adquisición del dominio. Las limitaciones a la propiedad privada no pueden afectar la esencia de ese derecho.
- xi. Conforme al principio de Subsidiariedad el Estado no debe suplantar la iniciativa y responsabilidad de las personas y de los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y a quiénes se les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. (empresas, familias, asociaciones etc..)
- xii. Ese mismo principio de subsidiariedad impone al Estado y sus organismos un deber de abstención que se traduce en que el Estado no se involucre en actividades que puedan ser realizadas por particulares, sino sólo en aquellas en que los particulares no puedan o no quieran realizar una actividad.
- xiii. Asimismo, las personas tienen el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.
- xiv. Nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional. (de ahí que, como se dijo, la reforma declarara los derechos de utilidad pública). El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales y tendrá siempre derecho a indemnización.